

Felipe se va a la guerra

La intervención de Felipe González en el Congreso, el pasado 14 de febrero durante el debate sobre el Estado de la Nación, fue claramente definitoria sobre la opinión del Gobierno y de la cúpula del PSOE sobre las centrales sindicales y sobre el significado del 14-D. Sus palabras fueron, ante todo, un intento de descalificación de CC.OO. y UGT, construido sobre falsedades, medias verdades y variadas tergiversaciones.

El proceso de enfrentamiento del Gobierno con el movimiento sindical, que, en su fase más aguda, dura más de un año, culminó en el fracaso de las negociaciones surgidas del éxito de la huelga general. La responsabilidad del mismo sólo cabe atribuirla a un Gobierno que se ha negado a asumir las consecuencias sociales y políticas del 14-D.

El origen histórico de la presente situación hay que situarlo a comienzos del verano de 1983, cuando un ministro de Economía y Hacienda, hoy conspicuo representante de los más poderosos intereses financieros, culmina la definición de una política económica profundamente contradictoria con el programa electoral del PSOE y, no digamos, con la tradición ideológica de este partido. Felipe González, con la fe del converso, ha mantenido esta política neoliberal hasta el punto de hacer fracasar un diálogo social querido por la gran mayoría de la población y hacer romper al PSOE con su sindicato, la UGT, y, de paso, con la cultura socialdemócrata de su partido. Con grave irresponsabilidad política se lanza ahora a una guerra con CC.OO. y UGT de inciertas consecuencias para la sociedad española.

CC.OO. y UGT no aceptaron la última propuesta del Gobierno, sobre todo porque no podían renunciar, por coherencia y elemental solidaridad de clase con los más desfavorecidos, al punto relativo al incremento de la cobertura del desempleo al menos hasta el porcentaje que el Gobierno se comprometió a establecer ¡en 1986! Tampoco en los puntos relativos a empleados públicos y pensionistas se satisfacían plenamente las peticiones sindicales. Aunque se ofertaban dos puntos de incremento para 1989, no se contemplaba la recuperación de la capacidad adquisitiva perdida en 1988 y en el protocolo de negociación colectiva de los funcionarios y el Gobierno pretendía introducir una inaceptable cláusula de renuncia al derecho de huelga.

Y todo esto se producía en un contexto en el que los portavoces gubernamentales, encabezados por Felipe González, reiteraban su negativa a realizar un «giro social» en su política económica, paradigma, según ellos, de todas las virtudes, a pesar de las incuestionables consecuencias que ha tenido en el incremento de la desigualdad social. Con ello anunciaban una posición mucho más dura en las demás reivindicaciones del 14-D, aquellas que incidían más profundamente en el «giro social», la política de empleo en primer lugar.

De lo anterior no hay que deducir que no se obtengan logros concretos del 14-D. En un momento o en otro -acordémonos de la huelga de la enseñanza pública- el Gobierno realizará concesiones que serán fruto de la más masiva acción que ha conocido la historia del movimiento obrero español por más que lo intenten vestir de «propia iniciativa».

Para un próximo futuro quedan principios difícilmente olvidables, como la recuperación de la capacidad adquisitiva cuando hay desviaciones en las previsiones de inflación, el contrato de inserción de los jóvenes no es previsible que salga del cajón..., y no hay que olvidar, la movilización sindical va a reanudarse con el impulso de una unidad de acción

CC.OO.-UGT reforzada que hasta el momento ha demostrado una capacidad de análisis e influencia y un sentido de la responsabilidad muy superiores a los que manifiesta el Gobierno.